

VOTO PARTICULAR QUE EMITEN EL CONSEJERO ELECTORAL GERARDO GARCÍA MARROQUÍN Y LA CONSEJERA ELECTORAL NORA HILDA URDIALES SÁNCHEZ, EN RELACIÓN CON EL ACUERDO NÚMERO IEEPCO-CG-34/2016, RESPECTO DEL REGISTRO DEL CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR DEL ESTADO, PRESENTADO POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS: REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y ENCUENTRO SOCIAL, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, numeral 1 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

El pleno del Consejo General de Instituto Estatal y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en sesión extraordinaria celebrada el 02 de abril del año 2016, aprobó por mayoría de 4 votos y tres en contra el **acuerdo número IEEPCO-CG-34/2016**, respecto del registro del Convenio de Candidatura Común para la elección de gobernador del estado, presentado por los partidos políticos: Revolucionario Institucional y Encuentro Social, en el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016.

El acuerdo aprobado establece que no es procedente el registro del convenio de candidatura común para la elección de gobernador del estado, presentado por los partidos políticos: Revolucionario Institucional y Encuentro Social, se citan los Considerandos 16 y 17, así como los puntos de acuerdo Primero, Segundo y Tercero, que a la letra dicen:

“16.- Que este Consejo General debe proceder al análisis de la solicitud de convenio de candidatura común para la elección de Gobernador del Estado presentado por los Partidos Políticos: Revolucionario Institucional y Encuentro Social, conforme lo siguiente:

A. En el caso concreto se debe analizar la solicitud efectuada por los Partidos Políticos: Revolucionario Institucional y

Encuentro Social, tomando en cuenta si es procedente el registro del convenio de candidatura común para la elección de Gobernador del Estado, para que, en caso de serlo, en un segundo término, pueda analizarse la documentación correspondiente relativa a la solicitud de registro del candidato común que postulan los partidos políticos señalados, en el acuerdo correspondiente.

Así entonces, como ya se refirió en el antecedente XII del presente acuerdo, con fecha veinticinco de marzo del dos mil dieciséis, los Partidos Políticos: Revolucionario Institucional y Encuentro Social, presentaron su convenio de candidatura común para contender en la elección de Gobernador del Estado, en el Proceso Electoral ordinario 2015-2016, así como su solicitud de registro de candidatura común para la elección referida.

En la documentación presentada, los Partidos Políticos: Revolucionario Institucional y Encuentro Social, aducen que derivado de la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de fecha diez de marzo del dos mil dieciséis, dictada en el expediente número SUP-RAP-102/2016, se consideró que los partidos políticos nacionales tienen derecho a participar, sin restricción alguna, en las elecciones locales mediante las figuras asociativas establecidas en la ley, aún cuando sea la primera vez que participe en dichos comicios locales, siempre y cuando se haya participado en su primer proceso electoral federal y conserve su registro.

En efecto, y como se desprende del análisis efectuado a la resolución dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente número SUP-RAP-102/2016, la interpretación que debe prevalecer respecto del artículo 85, párrafo 4, de la Ley General de Partidos Políticos, es en el sentido de que tratándose de partidos políticos nacionales de nuevo registro les está vedado

coaligarse únicamente en el primer proceso electoral federal inmediato posterior a su registro.

En ese sentido, si un partido político nacional ya participó en ese primer proceso electoral federal y conservó su registro, entonces es claro que la finalidad de la norma se ha cumplido y, por ende, tendrá derecho a coaligarse tanto a nivel federal como local.

Por tanto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que los partidos políticos nacionales tienen derecho a conformar las coaliciones que establece la ley (parciales, totales o mixtas), así como el derecho a participar, sin restricción alguna, en las elecciones locales, aún y cuando sea la primera vez que participe en dichos comicios, siempre que ya haya participado en su primer proceso electoral federal y conservarán su registro, dado que la medida establecida en el artículo 85, párrafo 4, de la Ley General de Partidos Políticos, sólo aplica en el primer proceso electoral en que participen con posterioridad a su constitución, lo anterior con apego a las normas constitucionales correspondientes y conforme a criterios de razonabilidad que permitan el pleno ejercicio del derecho de asociación en materia política.

En ese supuesto, este Consejo General también analizó la resolución de fecha veintitrés de marzo del dos mil dieciséis, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente número SUP-JRC-105/2016, en la cual se determinó por parte del órgano jurisdiccional que en materia de candidaturas comunes, aplica el mismo criterio que en materia de coaliciones por lo que si un partido político nacional ya participó en ese primer proceso electoral federal y conservó su registro, entonces es claro que la finalidad de la norma se ha cumplido y, por ende, tendrá derecho a participar en candidatura común tanto a nivel federal como local.

En virtud de lo anterior, y tomando en cuenta los criterios adoptados por el órgano máximo jurisdiccional en las resoluciones números SUP-RAP-102/2016 y SUP-JRC-105/2016, referidas en párrafos anteriores, este Consejo General debe ponderar y garantizar los derechos del Partido Encuentro Social y sus militantes, para poder participar mediante candidatura común en el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016; no obstante lo anterior, también debe considerarse que de conformidad con lo establecido por el artículo 5, párrafo 2, de los Lineamientos que deberán observar los partidos políticos al postular candidaturas comunes durante el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, los Partidos Políticos que pretendieran postular candidaturas comunes, debieron formalizarla mediante un convenio suscrito por la persona o personas facultadas conforme a la normatividad intrapartidaria para hacerlo; dicho convenio que corresponda a la candidatura que lo motive, debió ser presentado para su registro en las mismas fechas de registro en uniformidad que para los convenios de coalición, esto fue a más tardar el veintiséis de enero del dos mil dieciséis, como se refiere en el antecedente.

Así entonces, no obstante que debe garantizarse el derecho del Partido Encuentro Social para participar en candidatura común en el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, dicho instituto político debió presentar su convenio de candidatura común a más tardar el veintiséis de enero del dos mil dieciséis, lo anterior tomando en consideración que los partidos políticos deberán ajustarse a la fecha límite para presentar la solicitud de registro del convenio de candidatura común respectivo, conforme a lo establecido en el artículo 5, párrafo 2, de los Lineamientos que deberán observar los partidos políticos al postular candidaturas comunes durante el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016.

En este sentido, se estima que la definición de los plazos específicos para la presentación de los convenios de candidaturas comunes, la recepción de solicitudes de registro de dichas candidaturas, así como para la realización de los

actos internos para su aprobación por los partidos políticos que pretendan participar mediante esta figura de asociación, es una atribución de este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

Cabe señalar que el Partido Encuentro Social, conoció respecto de la aprobación por parte de este Consejo General, de los Lineamientos que deberán observar los partidos políticos al postular candidaturas comunes durante el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, sin que en el momento procesal oportuno recurriera los mismos, no obstante que fueron objeto de análisis por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmados mediante resolución número SUP-JRC-761/2016, de fecha veintidós de diciembre del dos mil quince. De la misma forma en la fecha límite para presentar los convenios de candidatura común para la elección de Gobernador del Estado, el Partido Encuentro Social, no manifestó su pretensión de participar mediante candidatura común en la elección de Gobernador del Estado, por lo que la etapa para la presentación de dichos convenios feneció sin que se solicitara ejercer ese derecho por parte del partido político aludido.

En virtud de lo anterior, este Consejo General considera que el Convenio de candidatura común no se presentó en tiempo y forma, por lo que no es procedente su registro.

B. *Ahora bien, en el supuesto de que este Consejo General, en un criterio garantista a fin de proteger los derechos de los militantes del Partido Encuentro Social, considerara procedente la participación de dicho partido político aun cuando el plazo para la presentación del convenio respectivo hubiera fenecido, debe analizarse si el Partido Revolucionario Institucional puede o no participar con el Partido Encuentro Social en candidatura común, lo anterior toda vez que como consta en los archivos de este Instituto, con fecha veintiséis de enero del dos mil dieciséis, los Partidos Políticos: Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, presentaron la*

solicitud de registro de la coalición, conjuntamente con el convenio respectivo y la Plataforma Electoral común de la coalición, para contender en la elección de Gobernadora o Gobernador del Estado, en el Proceso Electoral ordinario 2015-2016, el cual fue aprobado mediante acuerdo de este Consejo General número IEEPCO-CG-10/2016 dado en sesión especial de fecha cinco de febrero del dos mil dieciséis.

En dicho acuerdo, se determinó procedente el registro del convenio de coalición referido en el párrafo que antecede; de la misma forma, se otorgó el registro de la Plataforma Electoral presentada por la Coalición, misma que su candidata o candidato a Gobernadora o Gobernador del Estado sostendría en las campañas electorales.

En virtud de lo anterior, se actualizan dos interrogantes que deben ser objeto de análisis de este órgano electoral, la primera radica en si el Partido Revolucionario Institucional puede participar por una parte en coalición y por otra en candidatura común en la elección de Gobernador del Estado, lo anterior tomando en cuenta que dichas asociaciones entre partidos políticos no son coincidentes, puesto que por un lado participa en coalición con los Partidos Políticos: Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, y por otro lado pretende participar en candidatura común con el Partido Encuentro Social; la segunda interrogante estriba en si el Partido Revolucionario Institucional puede tener vigentes dos plataformas electorales, una por la coalición y otra por la candidatura común.

Para resolver la primera interrogante, debe considerarse que en caso de determinar procedente el registro del convenio de candidatura común objeto del presente acuerdo, el Partido Revolucionario Institucional participaría bajo dos diferentes modalidades de asociación para postular un mismo cargo de elección popular, lo que resulta contrario a los principios democráticos de nuestro Estado.

Dicha imposibilidad, encuentra su razón en el contenido del artículo 4, fracción XI de los Lineamientos en estudio, la cual deviene del hecho de que un partido político no puede jurídicamente y materialmente participar en dos asociaciones jurídicas con la finalidad de postular al mismo candidato en idéntico cargo en un mismo tipo de elección.

*Es decir, al establecer el referido artículo que no será motivo de negación de la candidatura común el que los partidos políticos participen en coaliciones en **otras candidaturas de elección popular**, es claro que la disposición tiene como finalidad permitir que en aquellos tipos de elección donde sean renovados diversos cargos, como ocurre con la elección de diputaciones en veinticinco distritos electorales, y en la elección de concejales a los diferentes ciento cincuenta y tres ayuntamientos, pueda válidamente conjugarse una o varias formas de asociación.*

Sin embargo, lo que impide al Partido Revolucionario Institucional la duplicidad de postulaciones en la candidatura común y la coalición de gobernador de la que forma parte y en la que ya se presentó la postulación de un ciudadano, no admite sino únicamente la postulación de un cargo indivisible, precisamente a la gubernatura del Estado.

De esta forma, al ser inseparable el cargo del tipo de elección, no podría considerarse procedente que un mismo partido político, como ocurre con el Partido Revolucionario Institucional, pueda dos veces ejercer su derecho de postular candidatos.

Lo anterior se traduce incluso en el absurdo de que si fuese procedente, en una boleta electoral que fuera marcada a favor de los Partidos Políticos: Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y Encuentro Social, sería imposible determinar a qué alianza correspondería la intención del votante. Además de que en esa hipótesis, al Partido Revolucionario Institucional no se le podría computar el voto para cada una de las alianzas que conforma, pues llevaría a considerar que con su actuar

traspasa la imparcialidad en la contienda al encontrarse en ventaja frente al resto de postulaciones de los partidos que hubiesen postulados candidatos propios o a través de una alianza. Máxime que la finalidad de toda asociación, ya sea coalición o candidatura común, es la de postular candidatos que les serán propios.

Robustece la afirmación el hecho de que al ser aprobado mediante Acuerdo del Consejo General IEEPCO-CG-10/2016 el registro del Convenio de Coalición integrado por los partidos: Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, se determinó que su actuación estaría sujeta a la actuación de la Coalición como la suma de sus integrantes, pues precisamente, al conceder bajo su clausulado las reglas por las cuales se sujetaría su actuación sería imposible aceptar que un mismo partido político en una elección que únicamente tiene un cargo a renovar, puede tener al mismo tiempo dos clausulados que cumplir, siendo que los mismos serían incompatibles pues compartirían la misma finalidad.

Se precisa que ello no implica desconocer las diferentes configuraciones por las cuales los partidos podrían ejercitar su derecho de asociación, pues las configuraciones de estas serán determinadas por el número de cargos a renovar y el número de partidos políticos en cada una de las alianzas; por lo antes referenciado, la aceptación de la candidatura común solicitada trasgrediera el contenido de los principios de las alianzas cualquiera que sea su especie.

Se afirma lo anterior, toda vez que una la finalidad y justificación, es evitar que a través de dos entes políticos sean postulados candidatos y candidatas propios en aquel donde ya se hubiere candidatos postulados de alguno de los integrantes de la asociación, como ocurre con la postulación de un candidato en el mismo cargo y en el mismo tipo de elección, además de que ello, trasgrediera la base de que no puede registrarse un candidato común a quien ya hubiese sido registrado como candidato de una coalición, lo anterior tiene

sustento en el marco de regularidad constitucional concedido para los diferentes tipos de asociación establecidos en los artículos 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, de la Ley General de Partidos Políticos, y 25, apartado B, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Además de lo referido, se puede robustecer el criterio sostenido con una interpretación sistemática de lo establecido por el artículo 87, párrafos 3, 4, 5, 6 y 15, de la Ley General de Partidos Políticos, pues el espíritu del legislador lo que pretende en dicho precepto legal es establecer las prohibiciones respectivas, con la finalidad de que un instituto político no pueda participar en dos asociaciones de partidos en una misma elección; de la misma forma se establece la prohibición de que un candidato pueda ser postulado en una misma elección por diferentes entes políticos, determinándose la única excepción a la regla, la cual radica en que debe existir coalición entre los partidos políticos para que puedan postular al mismo candidato.

Así mismo, atendiendo el criterio de uniformidad, se establece que ningún partido político podrá participar en más de una coalición, por lo que si tomamos en consideración a la figura de coalición como una asociación entre partidos políticos, correría la misma suerte la candidatura común, por lo que se podría interpretar que la prohibición alcanza a las candidaturas comunes.

No menos importante afirmar que al tener como fin ultimo la candidatura común y la coalición el derecho de postular candidatos, el referido derecho ya fue ejercido por el Partido Revolucionario Institucional, pues a través de la coalición que para gobernador le fue aprobada, ejerció en común con los partidos políticos: Verde a Ecologista de México y Nueva Alianza la postulación de su candidato al cargo de gobernador.

de tal suerte que si el objeto de la candidatura común es garantizar sus derechos de postular un candidato o candidata y

de esos últimos el derecho de ser votado, tal derecho ya fue debidamente garantizado.

C. Ahora bien, para resolver la segunda interrogante, la cual radica en si el Partido Revolucionario Institucional puede tener vigentes dos plataformas electorales, una por la coalición y otra por la candidatura común se expone lo siguiente:

Podemos entender que la plataforma electoral es la síntesis del ideario político, económico y social de los partidos, además de contener las propuestas que serán objeto de debate durante las campaña; dichas plataformas electorales deben respetar los principios más básicos de la convivencia política, esto es abstenerse de calumniar o denigrar a los adversarios, así como abstenerse de promover símbolos o signos que aludan a credos religiosos o a razas, por lo que una vez que las plataformas observan estos principios son aprobadas por la autoridad electoral y entonces los partidos ya se encuentran en posibilidad de difundir su contenido; así entonces, la Plataforma Electoral cobra un papel muy importante, puesto que con ellas se da a conocer las propuestas partidistas a través de los mensajes que los propios partidos difunden en los medios impresos y electrónicos.

En virtud de lo referido, y de conformidad con lo establecido en los artículos 39, incisos g) y h), de la Ley General de Partidos Políticos, y 95, fracciones VIII y IX, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, los estatutos de un partido político deben contener invariablemente la obligación de que se presente una plataforma electoral, para cada elección en que participe, sustentada en su declaración de principios y programa de acción, así como la obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral durante la campaña electoral en que participen.

De la misma forma, en términos de lo dispuesto por los artículos 115, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, los

partidos políticos y las coaliciones electorales estarán obligados a difundir su plataforma electoral registrada mediante los medios que consideren necesarios, pudiendo utilizar parte del tiempo de acceso a radio y televisión; con motivo de la difusión de las plataformas electorales registradas, y en el marco de las campañas electorales de elección de Gobernador, este Instituto podrá coordinar la realización de debates entre los candidatos registrados a dicho cargo, conforme a lo que determine este Consejo General.

Así mismo, el artículo 25, párrafo 1, inciso j), de la Ley General de Partidos Políticos, establece que es una obligación de los partidos publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen, así como en los tiempos que les corresponden en las estaciones de radio y en los canales de televisión, la plataforma electoral que sostendrán en la elección de que se trate.

De los preceptos legales invocados, se desprende que un partido político debe tener una Plataforma Electoral en cada una de las elecciones, sin que con esto permita que se puede contender en una elección con más de una Plataforma Electoral, puesto que esa es la finalidad de dejar sin efectos una Plataforma Electoral que fue registrada de manera individual por un partido político y que participa en coalición, ya que al asociarse con otros partidos políticos, deben presentar una Plataforma Electoral común entre los partidos políticos integrantes de la coalición que contenga las propuestas que serán objeto de debate durante las campaña por parte de los partidos integrantes.

Por ello, el hecho de que los Partidos: Revolucionario Institucional y Encuentro Social, manifiesten que sea la plataforma presentada por el primero de ellos a la que ajustaran su actuar, resulta contradictorio con las finalidades de la asociación previamente registrada, pues sería tanto como si compartiera las propuestas tanto la coalición como la candidatura común de manera indistinta, o si fuera diferente,

el Partido Revolucionario Institucional tendría ventaja al posicionar dos plataformas en un mismo proceso electoral.

En mérito de lo expuesto, tomando en cuenta que el Partido Revolucionario Institucional esta bajo una Plataforma Electoral que le fue aprobada en Coalición con los Partidos Políticos: Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, este Consejo General considera que no es procedente que el referido partido político pueda participar bajo dos Plataformas Electorales vigentes, puesto que interpretar lo contrario conduciría al absurdo de que dicho instituto político pudiera manejar dos Plataformas Electorales con ideologías distintas, lo cual pudiera darle ventajas en la elección de Gobernador del Estado.

17.- Que una vez vertidos los criterios referidos en el considerando anterior, este Consejo General considera que no es procedente el registro del convenio de candidatura común para la elección de Gobernador del Estado, presentado por los Partidos Políticos: Revolucionario Institucional y Encuentro Social, puesto que el convenio de candidatura común no se presento en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo 2, de los Lineamientos que deberán observar los partidos políticos al postular candidaturas comunes durante el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016; además de lo anterior, en el supuesto que se pudiera aplicar de manera retroactiva los criterios determinados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los expedientes números SUP-RAP-102/2016 y SUP-JRC-105/2016, al Partido Encuentro Social, para garantizar su participación en la elección de Gobernador del Estado, el Partido Revolucionario Institucional no podría participar en la candidatura común, puesto que ya es integrante de una coalición electoral para la elección de Gobernador del Estado, en la cual ya solicitó el registro del candidato a dicha elección, y ya cuenta con un registro de Plataforma Electoral presentada por la coalición, la cual dejó sin efectos el registro de la Plataforma Electoral que presentaron de forma individual los Partidos Políticos:

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, únicamente en la elección referida.

En consecuencia, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, y 116, fracción IV incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, párrafo 1, inciso j); 39, incisos g) y h); 85, párrafos 4 y 5, y 87, párrafos 3, 4, 5, 6 y 15, de la Ley General de Partidos Políticos; 25, Base A párrafos tercero y cuarto y Base B, fracción XVI, y 114 TER, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 13, párrafo 1; 14, fracciones I, VI, VIII y IX; 26, fracciones I, XLVII y XLVIII; 95, fracciones VIII y IX; 115, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca; 1, párrafo 1; 2; 4, fracciones IV, V, IX, X, XI, XII y XIII; 5, párrafos 1, fracciones II y III, y 2, y 6, de los Lineamientos que deberán observar los partidos políticos al postular candidaturas comunes durante el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, emite el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. *De conformidad con lo establecido en los considerandos números 16 y 17 del presente acuerdo, no es procedente el registro del convenio de candidatura común para la elección de Gobernador del Estado, presentado por los Partidos Políticos: Revolucionario Institucional y Encuentro Social.*

SEGUNDO. *Notifíquese el presente acuerdo a los Partidos Políticos: Revolucionario Institucional y Encuentro Social, para su conocimiento y efectos conducentes.*

TERCERO. *Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en atención a lo dispuesto por*

los artículos 15, párrafo 2 y 34, fracción XII, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, para lo cual, se expide por duplicado el presente acuerdo; así mismo, hágase del conocimiento público en la página de Internet de este Instituto.

Conforme a lo anterior, se advierte que, en el acuerdo votado por mayoría, se manifiesta una imposibilidad del Partido Revolucionario Institucional de registrar una candidatura común, ya que intenta el registro con dos plataformas electorales, desde nuestro particular punto de vista se trata de solo una plataforma electoral, respaldada desde dos formas diferentes, una coalición y una candidatura común.

El acuerdo aprobado también establece que se debe garantizar la participación del Partido Encuentro Social, sin embargo, no se entra al estudio de fondo, no se realiza un análisis exhaustivo sobre cómo debe garantizarse dicha participación, o porqué desde la solicitud realizada por el Partido Encuentro Social es o no procedente el registro de la candidatura común, ya que el argumento principal se centra en la imposibilidad del Partido Revolucionario Institucional en realizarla, pero en ningún caso, se establece por qué el Partido Encuentro Social no puede hacerlo.

Contrario a lo establecido en el acuerdo aprobado, consideramos que la solicitud realizada el veinticinco de marzo del presente año, debe proceder el convenio de candidatura común presentada por los Partidos Políticos Nacionales: Revolucionario Institucional y Encuentro Social, para lo cual se procede a exponer en 3 apartados los tópicos necesarios que sostienen este criterio.

A. Restricción de partidos políticos nacionales de participar en candidatura común en su primer proceso electoral local.

En términos de los Lineamientos que deberán observar los partidos políticos al postular candidaturas comunes, se establece en su artículo 2, párrafo 3, que los partidos políticos de nuevo registro no podrán convenir candidaturas comunes con otro partido político antes de la conclusión de su primera elección local inmediata posterior a su registro, según sea el caso.

Dicha regla debe ser analizada para determinar si el Partido Encuentro Social está en aptitud de participar en esta forma de asociación, por encontrarse en la hipótesis que prescribe el artículo de referencia.

Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante precedentes judiciales ha determinado que la referida regla restringe de manera excesiva y, por ende, vulnera el derecho constitucional de los partidos políticos nacionales de participar en las elecciones locales, pues el artículo 41, fracción I, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que ese tipo de institutos políticos tienen derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales, sea en forma individual o conjunta, mediante las distintas figuras que al efecto establece la legislación reglamentaria.

Para el caso, mediante sentencia SUP-RAP-102/2016 emitida en sesión pública el diez de marzo de dos mil dieciséis, determinó que la interpretación del apartado 4, del artículo 85, de la Ley General de Partidos

Políticos que realiza el Instituto Nacional Electoral en los lineamientos que deberán observar los Organismos Públicos Locales Electorales respecto de la solicitud de registro de los convenios de coalición para los procesos electorales locales, identificado con el número INE/CG64/2016, resultaba restrictiva y fuera del marco constitucional.

Para sostener lo anterior, explica que el artículo 85, apartado 4, de la Ley General de Partidos Políticos debe interpretarse en forma sistemática y funcional con los artículos 1º y 41 constitucionales, así como 23, apartado 1, inciso f), de la dicha ley general.

Conforme a dichos artículos los partidos políticos nacionales tienen derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales, así pues la participación en dichas elecciones puede ser realizada en forma individual o conjunta mediante la utilización de las diversas figuras reguladas por la legislación reglamentaria, por lo que los partidos tienen derecho a conformar frentes, coaliciones o fusiones.

Abona a la justificación que para el caso resulta aplicable, que todas las interpretaciones en forma restrictiva de los derechos subjetivos públicos fundamentales de asociación en materia política y de afiliación política electoral consagrados constitucionalmente, implican desconocer los valores tutelados por las normas constitucionales que los consagran, por lo cual, las autoridades deben realizar una interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de un privilegio, sino de derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no restringidos ni mucho menos suprimidos.

Al caso específico, y sobre el límite de los partidos políticos nacionales de participar en un proceso inmediato posterior a su registro en alguna forma asociativa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 23/2014 y acumuladas, así como 17/2014 y acumuladas, consideró que si bien el nuevo ente político ya cumplió con los requisitos que le permitieron superar su condición de agrupación política, todavía debe demostrar en la realidad política y en la confrontación electoral que, al alcanzar al menos la votación legal mínima, representa efectivamente una corriente democrática importante para lo cual se requiere que en esa primera elección participe solo, pues de lo contrario no podría determinarse su representatividad efectiva.

Por su lado, la sentencia en el SUP-JRC-105/2016 en lo que el caso resulta ilustrador, ya que en aquel caso se estimó que las legislaturas de los Estados tienen libertad para establecer los requisitos para que los partidos políticos nacionales intervengan en los procesos electorales locales en el ejercicio de una candidatura común, pero es incorrecto afirmar que un partido político nacional o local que participe por primera ocasión en una elección local no podrá postular candidatos en común.

La anterior conclusión descansa en el hecho de que esa interpretación impide al Partido Encuentro Social participar con otros partidos políticos en candidatura común para los diversos cargos a elegirse en perjuicio de sus derechos de asociación.

Para ello sostiene en igual proporción justificaciones como las vertidas en el recurso de apelación SUP-RAP-102/2016, declarando que si la finalidad es conocer la fuerza real que tienen los partidos de nueva creación para

intervenir en un proceso electoral y demostrar si cuentan con el suficiente apoyo electoral en lo individual para obtener un porcentaje que le permita conservar el registro, acceder a las prerrogativas e, incluso, a un cargo de elección popular por el principio de representación proporcional; entonces es claro que esta situación ya aconteció en el momento en que un partido político nacional ya participó en un proceso electoral federal y conservó su registro.

De esta forma ya se demostró que representa una corriente democrática atractiva para los ciudadanos que sufragaron en su favor, de tal manera que resultaría excesivo y desproporcional exigirle que demuestre su fuerza electoral en todas y cada una de las entidades federativas, porque, además de que dicha situación en forma alguna afectaría su registro o su posibilidad de participar en los comicios locales

Incluso el tribunal federal estimó que interpretar lo contrario conduciría al absurdo de que en virtud de la temporalidad que transcurre entre un proceso electoral federal y el siguiente, un partido político nacional podría coaligarse para la elección de Presidente de la República, pero no podría hacerlo respecto de un proceso comicial local, por ejemplo de ayuntamientos, si es el primer proceso electoral en el cual participa en la entidad federativa, con lo cual claramente tal prohibición resulta irracional y desproporcionada a la finalidad que se persigue con dicha norma.

Bajo esta lógica, el partido Político Encuentro Social, ya ha satisfecho la demostración de su fuerza política al haber obtenido más del 3% de la votación válida emitida en la elección electoral federal ordinaria anterior.

Por estas razones, y tomando como base los criterios garantistas arriba concluidos por el máximo tribunal en el país de la materia, las reglas de interpretación deben ampliar los alcances jurídicos para potenciar el ejercicio de participación política, en tanto que por sí mismo, implica garantizar el derecho fundamental de ser votado a través de la postulación de ciudadanas y ciudadanos para ocupar cargos de elección popular como ocurre en la presente solicitud de candidatura común.

En el mismo sentido, esta interpretación resulta acorde con lo dispuesto en los artículos 1º, tercer párrafo, 15 y 35, fracción VIII, fundamento 3º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la cual se estima que con base en un criterio de progresividad de los derechos político-electorales, esta autoridad administrativa debe optar por una interpretación que se traduzca en la ampliación de un derecho, para lo cual, basta el hecho de estar reconocido el derecho de los partidos políticos nacionales para buscar cualquier forma de asociación.

Sobre el principio de progresividad, existe aplicable al caso la jurisprudencia 28/2015 de rubro: “PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. VERTIENTES EN LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES”.

Del mismo modo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 29/2002 cuyo rubro es: “DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA”.

Por otro lado, no puede pasarse por alto, la finalidad de la candidatura común, pues en el caso, tiene como finalidad garantizar el respaldo y

apoyo de dos entes políticos para apoyar la postulación común de un ciudadano o ciudadana.

Por esta razón, acorde con la Jurisprudencia 27/2002 de rubro: “DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU TELEOLOGÍA Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN.” No menos importante decir que el derecho a ser votado mediante las elecciones libres, auténticas y periódicas, integra en cada uno de los candidatos y candidatas en un estado democrático, pues hacerlo de manera contraria sería como desconocer el mismo derecho de ser votado.

Así pues, la asociación de los partidos políticos que hoy solicitan la procedencia de su candidatura común no debe verse como un derecho aislado, distinto al de postular candidatos y de esta forma garantizar la posibilidad de que la ciudadanía acceda a espacios de representación popular a través de los referido entes de derecho público.

Se debe tener presente que en el caso, una interpretación al margen del principio pro persona, hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a participar en las contiendas electorales a través de las candidaturas comunes que presenten los partidos políticos, previsto en la Constitución Política del estado en el artículo 25 Base B, fracción XVI.

Por ello esta autoridad administrativa, tiene la obligación de dotar de contenido y alcance a los derecho político-electorales de votar y ser votado a través de las diferentes formas de asociación de los partidos políticos.

Al respecto, en términos de lo previsto en los artículos 35, fracción II; 41, segundo párrafo, bases I, II, III y IV, y 116, fracciones I, segundo párrafo, y

IV, incisos f), g) y h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende lo siguiente:

El derecho político-electoral del ciudadano a ser votado para todos los cargos de elección se encuentra establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, en el artículo 35, fracción II, del propio ordenamiento constitucional se establece expresamente como prerrogativa de todo ciudadano: "Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos, ante la autoridad electoral, corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;".

Como puede observarse, el ejercicio del derecho político-electoral del ciudadano a ser votado a través de los partidos políticos, requiere ser regulado o reglamentado a través de la normativa que al efecto emita la autoridad competente, la cual debe ajustarse a las bases previstas en la propia Constitución federal, respetando cabalmente el contenido esencial del sistema jurídico, armonizándolo con otros derechos fundamentales y salvaguardando los principios, valores y fines constitucionales involucrados, como pueden ser, la democracia representativa y los principios de certeza y objetividad que deben regir el ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones.

Es de enfatizarse que el derecho humano a ser votado, también encuentra sustento jurídico tanto en el artículo 23, párrafo 1, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como en el artículo 25, primer párrafo, incisos b) y c), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y de manera orientadora los párrafos 2 y 3, del artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los que se establece:

Convención Americana sobre Derechos Humanos.

"Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

...

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal."

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Artículo 25

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

...

- b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;
- c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Artículo 21

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Esta situación, impone al Estado la obligación de llevar a cabo todas las acciones tendientes a promoverlo, respetarlo, protegerlo y garantizarlo, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual se cumple, en principio, con la permisión de que el Partido Encuentro Social pueda participar en alguna forma de asociación, pues tal afirmación es congruente con los principios y reglas constitucionales en la materia.

En suma, la restricción contenida en el artículo 3, párrafo 2 de los Lineamientos que deberán observar los partidos políticos al postular candidaturas comunes restringe el derecho de asociación política de los partidos políticos nacionales, lo cual vulnera los derechos humanos de ser votado a través de partidos políticos que en alianza otorgan su respaldo.

Por ello, y bajo la interpretación garantista, conforme a los principios pro persona y de progresividad se CONCLUYE QUE EL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL ESTÁ EN APTITUD DE PARTICIPAR EN UNA CANDIDATURA COMÚN.

B. Extemporaneidad en la presentación del convenio de candidatura común.

Una vez determinado que si es procedente que un partido político nacional pueda participar en alguna forma de asociación en un proceso electoral local después de haber participado en uno federal, se procede a determinar si la presentación de su convenio fue apegado a los Lineamientos emitidos para tal efecto conforme a lo siguiente.

Sobre la postulación de candidatos o candidatas comunes, el criterio sostenido por los que suscribimos este Voto Particular guarda congruencia con las reglas que la propia autoridad jurisdiccional ha brindado, tratándose de las restricciones legalmente válidas.

En la especie, el artículo 5, numeral 2, de los Lineamientos que deberán observar los partidos políticos al postular candidaturas comunes, establece que el convenio que corresponda a la candidatura que lo motive, deberá presentarse en las mismas fechas que para los convenios de coalición.

Bajo esa regla, se tendría que considerar que la presentación del convenio que ahora se interpone, debió haberse realizado el veintiséis de enero del presente año para el cargo de la Gubernatura, lo anterior, porque esa fue la fecha última para la presentación de los convenios de coalición que podían solicitar los partidos políticos en términos del numeral 4 de los

Lineamientos que deberán observar los Organismos Públicos Locales respecto de la solicitud del registro de convenios de coalición para los procesos electorales locales.

Sin embargo, contrario a ello estimamos que al haberse determinado judicialmente posterior a la fecha antes referida, que el partido Encuentro Social puede participar en cualquier forma de asociación, este principio debe aplicarse retroactivamente en su beneficio.

Es decir, ya que en la época en que debía de haberse presentado el convenio, se encontraba prohibida la participación del Partido Encuentro Social, no era imputable al partido el superar el obstáculo legal.

Por el contrario, como fue desarrollado en el apartado anterior y a la luz de las sentencias SUP-RAP-102/2016 y SUP-JRC-105/2016, ya fue declarada la constitucionalidad de la participación de los partidos políticos nacionales en proceso electorales locales inmediatos a la obtención de su registro, ya que han demostrado su representatividad en el proceso electoral federal ordinario y mantuvieron su registro.

En consecuencia, debe superarse el obstáculo de la temporalidad establecida en la regla, para garantizar el pleno ejercicio del derecho de asociación y los derechos humanos intrínsecamente ligados a él.

Para ello, se estima que toda restricción de derechos humanos debe ajustarse a los principios de necesidad, idoneidad y proporcional de la medida restrictiva, lo que en el caso no acontece.

Por ello, en el presente caso la previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos de asociación de los partidos políticos

solicitantes no constituyen, de manera inmediata una franca violación a la temporalidad en la época de la presentación del convenio de candidatura común.

En ese sentido, se estima que exigir la presentación extemporánea del convenio de coalición, es superable, pues de solicitar de manera rígida que la presentación se hubiese realizado en la fecha prevista, hubiese conducido hacer nugatorio su derecho de asociación. Pues en aquella época no tenía reconocido el derecho y fue hasta la declaratoria judicial que se modificó el marco jurídico restrictivo.

Ello no implica que se deje de observar la obligación de los partidos que tienen mandado para la presentación oportuna de sus convenios, pero en el caso que nos atañe existe una causa justificada que hace superable el requisito, pues Encuentro Social no se encontraba en la misma posibilidad de ejercitar el derecho como el resto de partidos políticos.

Por lo anterior, es evidente que negarle el derecho de presentar su convenio de candidatura común, será negar los derechos humanos que protegen en la postulación de candidatas y candidatos comunes.

Se concluye en el caso, que no puede considerarse extemporánea la solicitud, pues ello sería irracional, injustificado y desproporcional. Pues los fines y principios constitucionales en materia electoral, implican la protección más amplia de derechos humanos, y solo garantizando su ejercicio se les da la debida vigencia.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° constitucional, en el que se establece que las personas gozan de los

derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que las normas relativas a esos derechos deben interpretarse favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Al respecto, cabe citar la jurisprudencia 1a . /J. 2/2014 , de rubro: “RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS.”

En este tenor, el principio constitucional que fija otorgar a la persona la protección más amplia, representa un parámetro obligatorio de interpretación, ya que si bien no establece derechos humanos de manera directa, constituye una norma que establece el deber jurídico de los órganos jurisdiccionales de interpretar, las disposiciones aplicables, conforme a lo dispuesto en el propio texto constitucional y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, signados por el Estado Mexicano, por tanto, esa disposición debe observarse, inclusive, por los partidos políticos, en su carácter de entidades de interés público.

De hacerlo en contra, no se alcanzaría el fin para el que fue concedida la participación de candidaturas comunes, además es necesaria, pues resulta la medida alternativa menos gravosa para el interesado, para el ejercicio de sus derechos y finalmente no supone un sacrificio excesivo de otros derechos vinculados a la postulación de candidatos en común.

En suma, es justificada la presentación fuera de los plazos del convenio de candidatura común, sobre la base de que es procedente superar la

restricción que le era impuesta, por haberse declarado posterior al vencimiento del plazo, la pertinencia del ejercicio del derecho de asociación del Partido Encuentro Social, con lo cual se otorga razonabilidad a las decisiones de esta autoridad electoral al margen de los derechos humanos que pudieron verse afectados antes de las declaratorias judiciales que sostienen los argumentos aquí vertidos.

C. Participación del Partido Revolucionario Institucional en dos formas de asociación en el mismo proceso electoral.

El artículo 4, fracción XI, de los Lineamientos multicitados, establece que no será motivo de negación de la candidatura común el que los partidos políticos participen en coaliciones en otras candidaturas de elección popular.

En concepto de los que suscribimos este Voto Particular, dicha porción normativa refleja la intención y una de las finalidades de la candidatura común, permitiendo la coexistencia de dos diferentes formas de asociación política para la postulación de candidatos, ya que si se analiza la fracción XI en sentido positivo, tenemos la posibilidad de que existan en un mismo proceso electoral la candidatura común y coaliciones dentro de las diferentes candidaturas que serán renovadas, como ocurre en el presente caso.

Ello es así, pues existe registrada una coalición por la que el Partido Revolucionario Institucional contiene en el mismo cargo de elección, más

ello no es impedimento para que sea sumada la voluntad del Partido Encuentro Social para respaldar la elección que llegue a presentar por un mismo candidato.

D. Revisión de los requisitos de procedencia.

En este tenor, los Partidos Políticos Revolucionario Institucional y Encuentro Social, cumplieron con lo dispuesto en los artículos 5, párrafo 1, fracciones II y III, y 6, de los Lineamientos que deberán observar los partidos políticos al postular candidaturas comunes durante el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, lo anterior puesto que presentaron su convenio de candidaturas comunes, el cual especifica lo siguiente:

- a) Presentaron las resoluciones o acuerdos de los órganos o instancias partidistas competentes, nacionales y locales, sobre la autorización para participar con otros partidos políticos en las candidaturas comunes;
- b) Formalizaron la candidatura común mediante un convenio suscrito por la persona o personas facultadas conforme a la normatividad intrapartidaria para hacerlo;
- c) Refirieron la elección que motiva el convenio respectivo y el cargo para el que postularan candidato común, siendo éste el ciudadano Alejandro Ismael Murat Hinojosa;
- d) Indicaron las aportaciones de cada uno de los Partidos políticos postulantes de las candidatas y candidatos comunes para gastos de la campaña, sujetándose a los topes de gastos de campaña que para ello determine la autoridad electoral, conforme a lo siguiente:

PARTIDO POLÍTICO	PORCENTAJE
PRI	100% De las prerrogativas que conforme a la ley y a la distribución interna que se efectuó
PES	33% De las prerrogativas que conforme a la ley y a la distribución interna que se efectuó

f) Señalaron los supuestos para la sustitución de las candidaturas comunes que postulen, ajustándose a la legislación electoral y la normatividad interna del Instituto.

g) Finalmente en cumplimiento al artículo 4, fracción I, de los Lineamientos, las partes convinieron en optar que la plataforma electoral en común será la que tenga registrada el Partido Revolucionario Institucional.

Que en mérito de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, párrafo 1 y 6, de los Lineamientos que deberán observar los partidos políticos al postular candidaturas comunes durante el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, este Consejo General considera procedente registrar el convenio de candidatura común presentado.

Finalmente al resultar satisfecho los requisitos para la aprobación de la candidatura común, en términos del artículo 8 de los Lineamientos al que deberán ajustar su actuar los partidos políticos al postular candidatos comunes, para el registro de la candidatura se estará a lo dispuesto a la normatividad aplicable en la materia, siendo objeto de análisis la procedencia de la misma en el acuerdo que para tal efecto emita este Consejo General.

Así entonces, el derecho aplicado a un caso concreto tiene diversas percepciones, no se comparte el contenido del acuerdo aprobado por las razones expresadas, porque no se garantiza el ejercicio de los derechos de los institutos políticos, toda vez que es convicción de los que emitimos este Voto Particular orientar nuestra actuación a garantizar los derechos de los institutos políticos, y consideramos que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca debe hacer posible que los organismos y las personas participen en un Proceso Electoral Local a partir de lo que está confeccionado en la normatividad aplicable.

De tal suerte que, por lo vertido anteriormente y en estricto apego al Principio de Legalidad, nos hemos permitido emitir el presente VOTO PARTICULAR, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO IEEPCO-CG-34/2016, RESPECTO DEL REGISTRO DEL CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN para la elección de Gobernador del estado, presentado por los partidos políticos: Revolucionario Institucional y Encuentro Social, en el proceso electoral ordinario 2015-2016.

MTRO. GERARDO GARCÍA MARROQUÍN
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. NORA HILDA URDIALES SÁNCHEZ
CONSEJERA ELECTORAL